

La “asistencia para el desarrollo” de Estados Unidos a los países del ALBA-TCP (2017-2021), una radiografía crítica

US “Development Assistance” to ALBA-TCP Countries (2017-2021), a Critical Radiography

Dra. C. Tamara Lajtman

Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ). Becaria posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC). Miembro de la Unidad de Análisis Geopolítico del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)

e-mail: tamara.lajtman@gmail.com

Número ORCID: 0000-0003-0356-9473

MSc. Aníbal García Fernández

Candidato a Doctor en Estudios Latinoamericanos, Maestro en Estudios Latinoamericanos y Licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), miembro de la Unidad de Análisis Geopolítico del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)

e-mail: gafa1989@gmail.com

Numero ORCID: 0000-0003-4778-3324

Dra. C. Silvina Romano

Doctora en Ciencia Política, Licenciada en Historia y Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), Coordinadora de la Unidad de Análisis Geopolítico del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)

e-mail: silvinamceleste@gmail.com

Numero ORCID: 0000-0003-2537-8758

Resumen

El artículo presenta una radiografía de la “asistencia para el desarrollo” de EE.UU. a los países del ALBA-TCP en período 2017-2021, brindando una descripción detallada de las agencias y subagencias estadounidenses que financian e implementan la asistencia, las instituciones locales que canalizan la asistencia en los países de la Alianza y los sectores a los que es destinada. El análisis empírico se realiza a partir de las bases de datos oficiales del gobierno estadounidense, USAID Explorer y ForeignAssistance.gov, pero desde una perspectiva que critica la clasificación oficial de la asistencia. Los hallazgos ponen en evidencia que el modus operandi de la “asistencia” económica y para la seguridad está intrínsecamente articulado a una red institucional, extendida en el tiempo y en el territorio, que garantiza la reproducción de determinadas concepciones de desarrollo, democracia y seguridad, que trasciende a gobiernos demócratas y republicanos.

Palabras clave: Asistencia para el desarrollo, Estados Unidos, ALBA-TCP, asistencia militar, asistencia en seguridad, desestabilización

Abstract

The article presents an X-ray of US “development assistance” to ALBA-TCP countries in 2017-2021, providing a detailed description of US agencies and sub-agencies

that fund and implement assistance, local institutions that channel assistance in the countries of the Alliance and the sectors to which it is directed. The empirical analysis is carried out from the official databases of the US government, USAID Explorer and ForeignAssistance.gov, but from a perspective that criticizes the official classification of assistance. The findings show that the modus operandi of economic and security assistance is intrinsically articulated to an institutional network, extended in time and territory, which guarantees the reproduction of certain conceptions of development, democracy and security that transcends Democrat and Republican governments.

Key words: *Development assistance, United States, ALBA-TCP, military assistance, security assistance, destabilization*

Introducción

En diciembre de 2021, ante el anuncio de Joe Biden de “enviar millones de dólares para fomentar la democracia”, desde la Secretaría Ejecutiva de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP)¹ se manifestó la necesidad de informar a los pueblos, a través de informes periódicos, hacia dónde va ese dinero, quiénes lo administran y quiénes lo reciben (Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, 2021). Si bien hay una gran cantidad de estudios sobre la injerencia de Estados Unidos (EE.UU.) a países como Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua desde el siglo XIX y con más ahínco en el siglo XX y XXI, son escasos los análisis sobre la injerencia estadounidense contra el ALBA-TCP y, sobre todo, en países caribeños que conforman dicho esquema de integración. Por ello, cobra relevancia un análisis de conjunto y planteando las distinciones entre los países que lo integran.

La administración de Donald Trump advirtió desde un inicio que recortaría la asistencia (y así lo hizo), no obstante, esto no significa que

tal asistencia haya desaparecido pues, en muchos casos, se ha reconducido, incluso para propósitos para los que no había sido diseñada, como el respaldo al “cambio de régimen” en Venezuela. Con la llegada al gobierno de Biden, la asistencia para el desarrollo vuelve a adquirir centralidad como uno de los pilares fundamentales articulado con la diplomacia. Solo en 2021, EE.UU. invirtió 1 757 millones de dólares en cientos de fundaciones y ONG a nivel regional.

Esta llamada “asistencia para el desarrollo” o “ayuda para el desarrollo” proveniente de EE.UU. abarca desde programas de salud y alimentación, hasta asesoría para reformas jurídicas y de aparatos electorales, incluida una permanente “asistencia” en materia de seguridad. Tiene una larga trayectoria como arma de poder blando fuertemente arraigada en la región a través de una red institucional que se viene construyendo desde la Guerra Fría hasta la actualidad. En efecto, la asistencia técnica y la asistencia para el desarrollo constituyeron uno de los pilares de la expansión del capitalismo monopolístico estadounidense de posguerra para “contener al comunismo”, en el marco dado por la institucionalización de la guerra psicológica y la guerra política bajo el paraguas de la Ley de Seguridad Nacional de 1947 y la construcción de un Estado de Seguridad Nacional (Wills, 2010; Romano, 2016). El Punto IV de Truman (1949) fue uno de los primeros intentos de asistencia a países “subdesarrollados”. No obstante, fue a inicios de la década de 1960, a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo (hoy USAID), que la asistencia se fue institucionalizando y fluyendo de modo cada vez más sistemático. Esta asistencia tenía por objetivo contribuir al desarrollo de los países del continente, en clave de “modernización” de la infraestructura, acceso a salud, educación y aspectos culturales, incluidos los programas de mejoras de cultivos para promover la producción a gran escala (Romano, 2013). En general, no incluían programas de transferencia tecnológica. Una clave importante, es que desde su inicio tuvo como complemento pro-

gramas de asistencia militar y policial implementados por las mismas agencias que proveían de asistencia económica, como la AID. Mientras la asistencia económica se postuló como herramienta indicada para involucrar a los países periféricos en la expansión del capitalismo estadounidense mediante el “convencimiento”, la asistencia para la seguridad operó vinculada a las fuerzas de seguridad contrainsurgentes locales, garantizando que ese sistema deviniera en la “única” opción, descartando (a sangre y fuego) otros procesos políticos, en particular los nacional-populares (Romano, 2017 y 2012).

Esta articulación de “asistencia para el desarrollo” y asistencia para la contrainsurgencia adquirió un marco institucional y legalidad con la Alianza para el Progreso lanzada en 1961 por el gobierno de John F. Kennedy, que más allá de una retórica liberal de alianza regional, tenía como objetivo inmediato detener el contagio de la experiencia cubana. Distintos análisis dan cuenta de la articulación entre programas de asistencia para la “modernización” de los países de América Latina articulados deliberadamente con asistencia para contener y desarticular la “insurgencia” (Morgensten y Brown, 2022; Field, 2016; Romano, 2013; Tapia Valdés, 1980). Las diversas maniobras de desestabilización política y económica, así como los golpes de Estado cívico militares, desde el golpe contra Jacobo Arbenz en Guatemala, pasando por el permanente asedio contra Cuba, el derrocamiento de Goulart en Brasil (1964) y Bosch en República Dominicana (incluido la ocupación militar de 1965), hasta el golpe contra Salvador Allende en Chile (1973), contaron con el apoyo directo o indirecto de agencias del gobierno estadounidense, presencia que cobró creciente visibilidad ante la opinión pública internacional. A inicios de los setenta, con la presión de Vietnam y la crisis del dólar, las agencias del gobierno estadounidense empezaron a articular la “multilaterización” de la asistencia, es decir, la canalización a través de instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mun-

dial (BM) y bancos regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como un modo de disminuir el grado de “politización” en un escenario internacional y regional en el que EE.UU. se veía obligado a recuperar legitimidad.

Algunas corrientes críticas de la ayuda para el desarrollo han advertido que esta ha sido clave para la apertura de mercados y como motor de expansión de la economía estadounidense, contribuyendo a un esquema de endeudamiento permanente de los países receptores (Mahembe y Odihambo, 2017; Petras y La Porte, 1970). De forma articulada con la asistencia militar, facilitó la apertura de nuevos mercados para la industria de defensa estadounidense (Appleman Williams, 2007; Baran y Sweezy, 1974; Barnett, 1974). Al mismo tiempo, desde su inicio ha operado como herramienta de dominación (Ayllón, 2006: 35) e instrumento político para presionar a gobiernos o sectores que tenían proyectos centrados en recuperar la soberanía o se apartaban de las premisas de seguridad hemisférica y apertura de mercados (Romano, 2018).

En definitiva, al menos desde la implementación de la Alianza para el Progreso esta “asistencia” se plantea como una de las herramientas de poder blando de la política exterior estadounidense, utilizada para (re)conducir la economía, la política y la seguridad de los Estados y Gobiernos de la región, en coincidencia con los lineamientos geoeconómicos y geopolíticos de EE.UU. Es una “ayuda” que se respalda por la asistencia militar, el poder duro, en un esquema de exportación e imposición de paradigmas de democracia, desarrollo y seguridad, acorde con los valores del “modo de vida americano” y sujetos a diversos intereses y objetivos del sector público y del ámbito privado de EE.UU. En este sentido, la “asistencia” como poder blando constituye un mecanismo de intervención y potencial desestabilización de gobiernos y sectores que cuestionen dichos lineamientos.

En lo que se refiere al ámbito burocrático/procedimental, en el esquema neoliberal de despolitización de la ayuda y reemplazo del

Estado por la acción focalizada del “tercer sector”, la mayor parte de la asistencia estadounidense se brinda como donación. Se elaboran proyectos que distribuyen fondos a través de un canal-socio local, generalmente una fundación, ONG, organización multilateral, para llevar a cabo un proyecto específico. La “ayuda” también se proporciona en forma de contribuciones a organizaciones internacionales (como la Organización de las Naciones Unidas-ONU), asistencia técnica y apoyo presupuestario directo (transferencia de efectivo) a los gobiernos (Morgenstern y Brown, 2022).

Conociendo los antecedentes de la asistencia de EE.UU. en la región y considerando las tensiones y presiones contra gobiernos que no se alinean a la doctrina de seguridad hemisférica estadounidense y sus nociones de democracia y desarrollo, ¿cómo se presentan los datos sobre asistencia desde el gobierno de EE.UU.? ¿Cómo se organiza la distinción entre “asistencia económica” y “asistencia militar” sabiendo que la noción de Seguridad Nacional (de EE.UU.) tiende a abarcarlo todo? ¿Existe alguna diferencia entre el tipo de asistencia brindado a cada país de la ALBA-TCP, en todos predomina por igual la asistencia económica o la asistencia militar? ¿Es igual la presencia institucional de organismos del gobierno de EE.UU. en todos los países o hay Estados donde es mayor la presencia del tercer sector que la de agencias o subagencias de EE.UU.? ¿Existe diferencia entre administraciones republicanas y demócratas en cuanto a los montos de la asistencia y sectores a los que se envían estos presupuestos? ¿Cuál es la presencia de la asistencia en el ámbito político, considerando agencias y subagencias involucradas en la promoción de la democracia, la libertad de expresión, etc., se trata de una presencia significativa o es marginal? Siguiendo esos interrogantes, el objetivo del artículo es presentar una radiografía sobre los sectores, actores y dinámicas involucradas en la “asistencia para el desarrollo” de EE.UU. para los países del ALBA-TCP en período 2017-2021, tomando el gobierno republicano de Donald Trump y un breve período del gobierno demócrata de Joe

Biden. Se realiza una descripción detallada de las agencias y subagencias estadounidenses que financian e implementan la asistencia, las instituciones locales (ONG, fundaciones, empresas, etc.) que canalizan la “asistencia” en los países de la Alianza y los sectores a los que es destinada.

El artículo comienza con una breve introducción y aclaraciones metodológicas respecto al uso de las bases de datos de USAID Explorer y Foreign Assistance.gov, señalando algunas controversias sobre los aspectos que son incluidos en materia económica, pero que, desde una perspectiva crítica, pueden ser comprendidos como parte de la doctrina de seguridad de EE.UU. El segundo apartado explica la estructura y dinámica de la asistencia de EE.UU. a los países que conforman el ALBA-TCP; se analiza la asistencia en tres niveles: agencia, subagencia y principales canales que reciben el financiamiento. El tercer apartado brinda una visión transversal de la asistencia económica, militar y de seguridad en los países de la alianza. En el cuarto apartado se analiza la asistencia económica en los países de la alianza, el siguiente apartado enfoca en la asistencia militar y en seguridad. Por último, se presentan algunas reflexiones finales.

Aclaraciones metodológicas

El análisis empírico se realizó a partir de dos bases de datos oficiales, USAID Explorer, para el periodo Trump (2017-2020) y Foreign Assistance.gov para el periodo Biden (2021).² Sin embargo, es fundamental aclarar que los datos oficiales fueron retomados desde una perspectiva crítica que cuestiona la construcción de indicadores en el norte global y su aplicación acrítica para analizar los fenómenos en la periferia. En particular, hemos cuestionado la clasificación oficial que hace el gobierno estadounidense sobre asistencia extranjera, proponiendo entonces una nueva clasificación (organización) de la información (Romano et al, 2020; Lajtman y García Fernández, 2022; Lajtman, 2022).

La clasificación oficial separa la asistencia exterior en “asistencia económica” y “asisten-

cia militar”, en la que los programas de asistencia para la seguridad no militares están incluidos en la categoría de “asistencia económica”. Así, todos los programas de control de narcóticos administrados por agencias del Departamento de Estado, los programas de la DEA y del FBI, del Departamento de Justicia, diversas actividades del Homeland Security y algunos programas específicos de antiterrorismo, se consideran oficialmente como “asistencia económica” y no como “asistencia militar”. Incluso programas del Departamento de Defensa (es decir, lo netamente militar) relacionados, por ejemplo, con asistencia humanitaria, aparecen como “asistencia económica”. Ante este diagnóstico, la metodología adoptada fue la de reorganizar los datos, trasladando los programas y actividades con contenido netamente de seguridad a la asistencia militar conformando una nueva categoría denominada “asistencia en seguridad y militar”.

Para los países del ALBA, fueron reubicados al rubro “seguridad y militar” los programas y actividades relacionados con la aplicación de la ley (*law enforcement*), antinarcóticos, aparatos judiciales, anticorrupción, seguridad de fronteras y seguridad ciudadana implementados por las siguientes subagencias:

i) *Bureau for Latin America and Caribbean* de la USAID: Se trasladaron las actividades de este buró en Nicaragua y Venezuela relacionadas con seguridad ciudadana, aparatos judiciales y vinculadas con iniciativas de seguridad como la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI) y la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI).

ii) *Office of Technical Assistance* del Departamento de Tesoro: Actividades relacionadas a crímenes económicos y lavado de dinero en San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas.

iii) INL del Departamento de Estado: Programa *International Narcotics Control and Law Enforcement* (INCLE) y *Andean Counterdrug Initiative* (ACI) para Bolivia.

iv) DEA del Departamento de Justicia: Actividad de la *Special Investigation Unit* (SIU) en Cuba.

v) *Defense Security Cooperation Agency* del Departamento de Defensa: Actividad de asistencia médica y dental a Nicaragua; y atención a desastres en Venezuela.

vi) *Transportation Security Administration* del *Homeland Security*: Capacitación técnica en seguridad de aviación en Santa Lucía y Antigua y Barbuda.

El estudio comprende el análisis a tres niveles: agencias, subagencias y principales canales que reciben el financiamiento en los países que conforman el ALBA-TCP. Si bien, las bases de datos de USAID Explorer y Foreign Assistance.gov permiten hacer otro tipo de recortes analíticos en cuanto a países y rubros, se ha decidido este procedimiento pues posibilita un acercamiento panorámico que permite conocer qué Departamentos y unidades organizativas del gobierno estadounidense que otorgan recursos a los distintos canales.

Otro aspecto metodológico importante es que a partir del trabajo con dos bases de datos es que a partir de marzo de 2022 (con el cambio de USAID Explorer a Foreign Assistance.gov) hubo una modificación en la forma de presentación de datos. El caso más preocupante es que la National Endowment for Democracy (NED) deja de figurar como subagencia del Departamento de Estado, por lo que no existe el registro de su financiamiento a los distintos canales en la nueva base de datos, solamente el monto total de la NED, la cual tiene datos hasta 2019 (en la USAID Explorer, sí se tenía registro detallado hasta 2020). Pero, tal como se puede corroborar en la misma página web de la NED los programas siguen activos.

La estructura de la asistencia de EE.UU. a los países del ALBA-TCP

Son tres los niveles que conforman lo que denominamos “estructura de la asistencia” a los países de ALBA-TCP y que permite visualizar la jerarquía/burocracia de la asistencia (ver figuras 1 y 2).

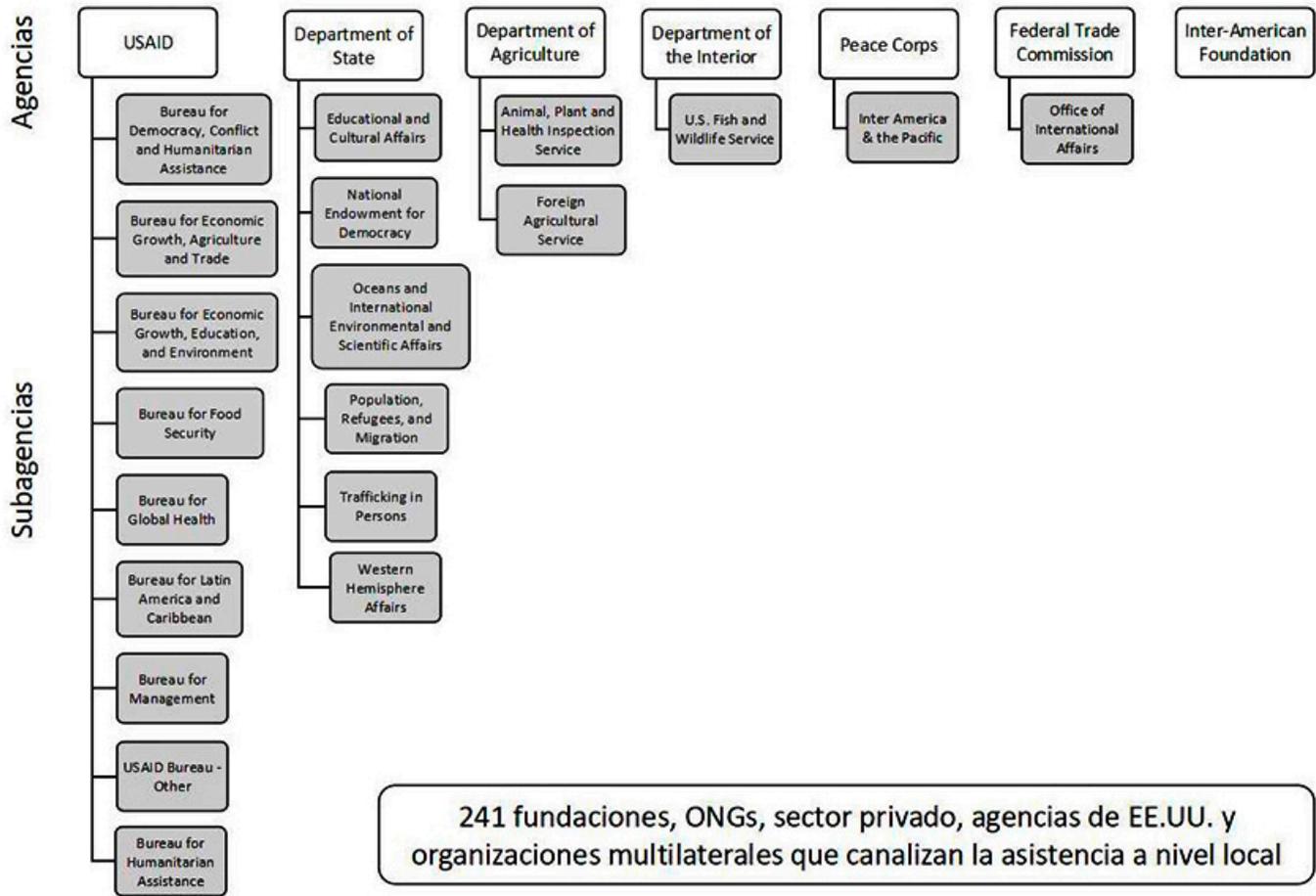


Figura 1: Estructura de la Asistencia Económica EE.UU.-ALBA

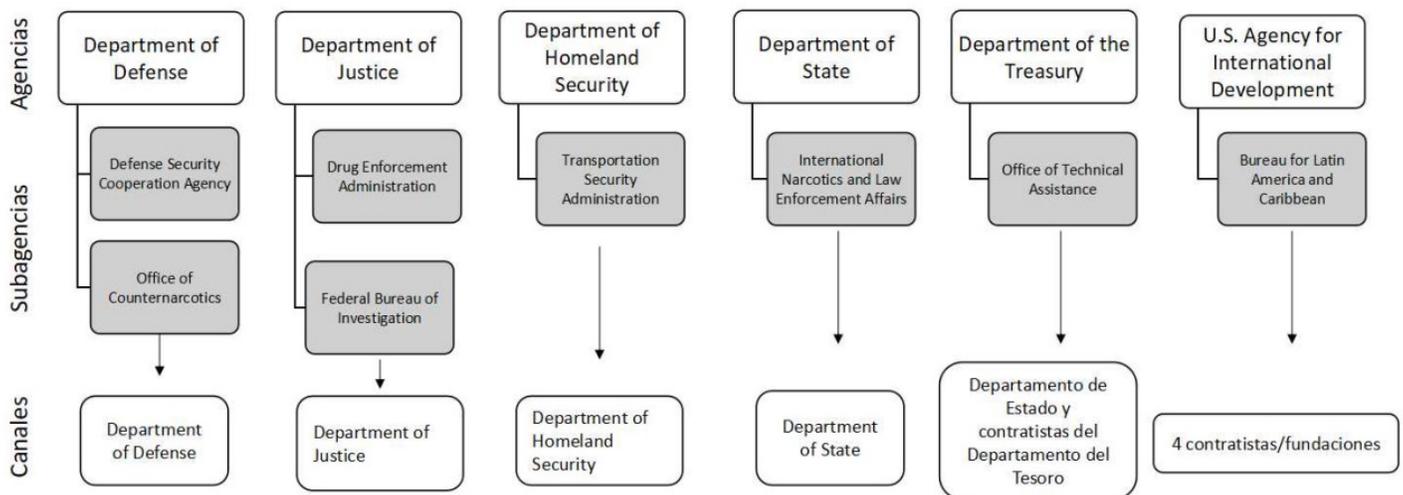


Figura 2: Estructura de la Asistencia de Seguridad y Militar EE.UU.-ALBA

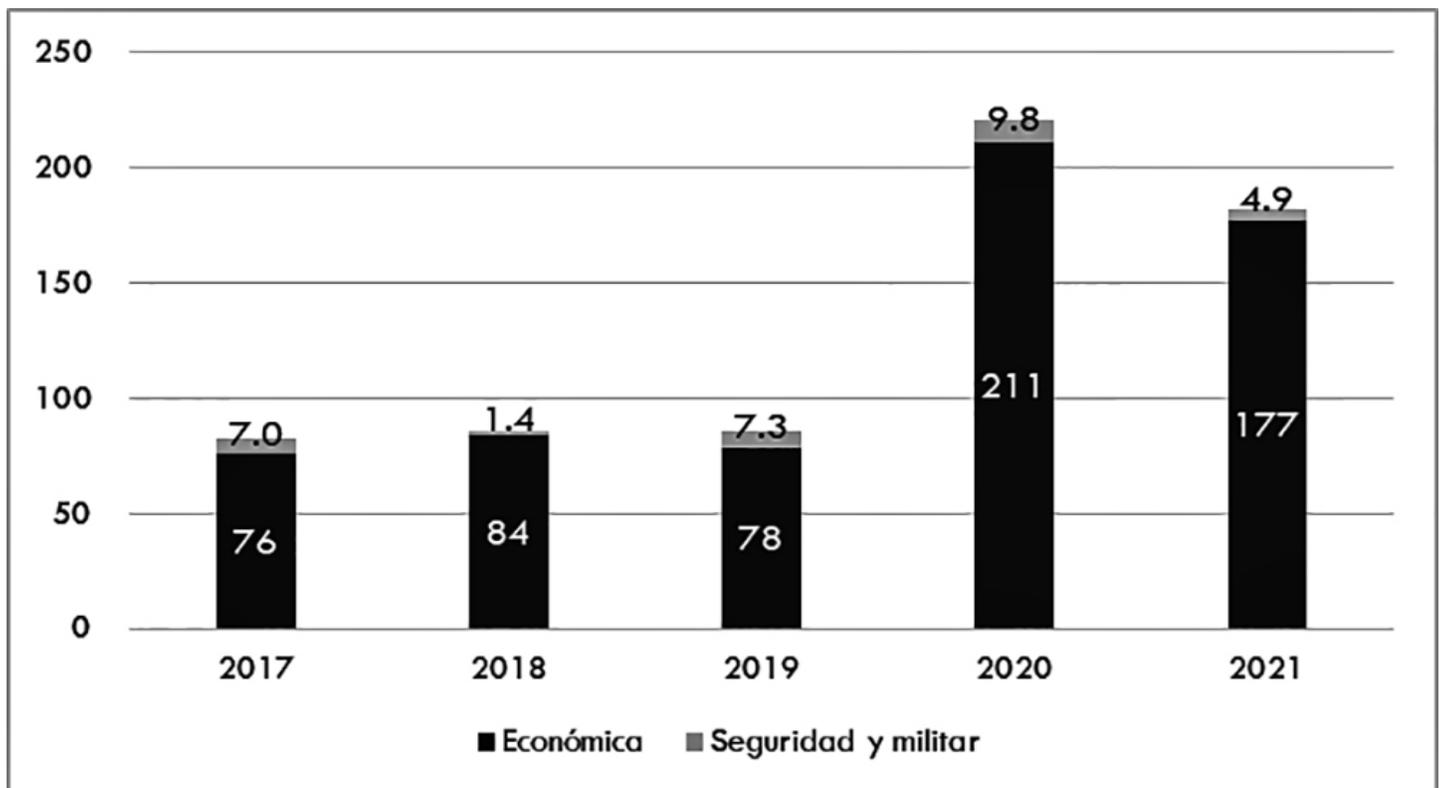
En un primer nivel están las agencias implementadoras, que son las agencias estadounidenses que administran/implementan programas de asistencia exterior utilizando fondos asignados directamente a ellas o fondos transferidos de otra agencia (por ejemplo, los fondos asignados a través de las cuentas del Departamento de Estado y el Departamento de Agricultura se utilizan para programas implementados por USAID). Los datos presentados en este trabajo se refieren a la agencia que administró la asistencia, no necesariamente la agencia a la que se asignaron originalmente los fondos. En el período 2017-2021 la asistencia a los países del ALBA fue implementada por 11 agencias: 1) U.S. Agency for International Development (USAID), 2) Department of State, 3) Department of Agriculture, 4) Department of the Interior, 5) Peace Corps, 6) Federal Trade Commission, 7) Inter-American Foundation, 8) Department of Defense, 9) Department of Homeland Security, 10) Department of Justice, 11) Department of the Treasury.

El segundo nivel es el de subagencias, que son las oficinas o unidad organizativa, dentro de la agencia del Gobierno de EE.UU. que administra la actividad. Son 27 las subagencias que implementan la asistencia a los países del ALBA. Por último, en un tercer nivel están los canales, que se refieren a las instituciones del Gobierno de EE.UU., empresas privadas, fundaciones, ONG, instituciones multilaterales, entre otras, que reciben los fondos de una agencia implementadora para llevar a cabo una actividad específica de asistencia exterior. De la sistematización realizada se contabilizan por lo menos 241 canales que distribuyen la asistencia a los países del ALBA.

Panorama general de la asistencia estadounidense a los países del ALBA-TCP

Entre el 2017 y el 2021 la asistencia estadounidense hacia los países del ALBA fue de 657,1 millones dólares, siendo 626,7 millones de dólares (95%) de asistencia económica y 30,5 (5%) de asistencia en seguridad y militar (ver figura 3).

Figura 3: Asistencia EE.UU.-ALBA (millones de dólares)



Fuente: USAID Explorer (2020) y ForeignAssistance.gov (2021).

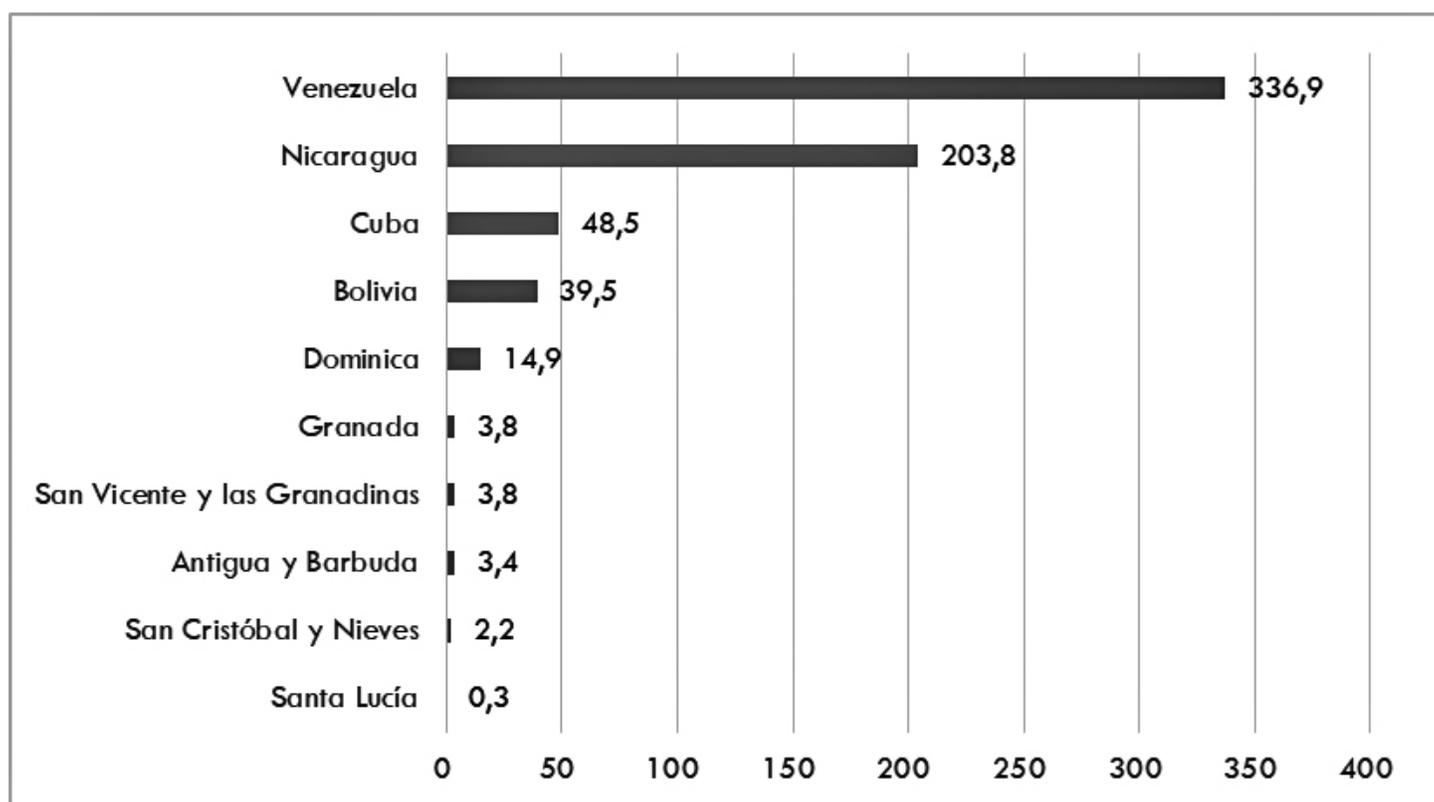
Es importante subrayar que la administración Trump incrementó la asistencia a los países del bloque que tiene su pico en 2020, pasando de 85,6 millones de dólares a 221,1 millones, el equivalente a 158%, que se explica en buena medida por el incremento en la asistencia de USAID a Venezuela (151,8 millones en 2020). En el primer año de la administración Biden, se percibe un leve descenso en la asistencia a los países de la Alianza. Sin embargo, hay que considerar que los datos sobre la asistencia militar de 2021 no están disponibles a septiembre de 2022. Esta ausencia, además de generar incertidumbre, parecería mostrar cierta falta de transparencia del gobierno demócrata. Asimismo, destaca que el único país con aumento de la asistencia en el primer año del gobierno de Biden es Nicaragua, con el incremento de 31,2 % en la asistencia eco-

nómica entre 2020 y 2021. En relación con la asistencia por la pandemia del COVID-19 en el primer año de Biden fueron cuatro los países que recibieron financiamiento: Nicaragua (4,5 millones de dólares), Venezuela (702 396 dólares) y Bolivia (638 151 dólares).

En lo que se refiere a las principales agencias con financiamiento a los países del ALBA, en primer lugar, está la USAID, con el 76,9% del total de la asistencia, luego el Departamento de Estado (8%) y de Agricultura (7,9%). El Departamento de Defensa agrupa solo el 3,1% de la asistencia total. Sin embargo, considerando únicamente la asistencia en seguridad y militar, concentró el 66,5% del financiamiento.

Tal como se ilustra en la figura 4, Venezuela y Nicaragua son los principales receptores y juntas concentran el 82,3% de la asistencia en el periodo analizado.

Figura 4: Asistencia EE.UU.-ALBA 2017-2021, por país (millones de dólares)



Fuente: USAID Explorer (2020) y ForeignAssistance.gov (2021)

Asistencia económica

La asistencia económica de EE.UU. a los países del ALBA en el periodo analizado fue de 626.7 millones de dólares (ver tabla 1) y está principalmente concentrada en Venezuela (48,3%) y en Nicaragua (35,4%).

Tabla 1: Asistencia Económica EE.UU.-ALBA (2017-2021)

País	USD
Venezuela	327.841.739
Nicaragua	198.116.957
Cuba	48.508.426
Bolivia	39.352.098
Dominica	11.414.302
San Vicente y las Granadinas	874.399
San Cristóbal y Nieves	339.007
Antigua y Barbuda	109.251
Santa Lucía	105.427
Granada	6.346
TOTAL ECONÓMICA	626.667.952

Fuente: USAID Explorer (2020) y ForeignAssistance.gov (2021)

La principal agencia que brinda asistencia económica es la USAID. Sus dos subagencias más importantes, el Bureau for Latin America and Caribbean y Bureau for Democracy, Conflict and Humanitarian Assistance representan el 80,2% de la asistencia económica total. En segundo lugar, el Departamento de Estado con 8,3%, siendo la NED su principal subagencia seguida de Population, Refugees, and Migration. En tercer lugar, está el Departamento de Agricultura, que tiene presencia únicamente en Bolivia, Granada y Nicaragua, a través de las subagencias Foreign Agricultural Service y Animal, Plant and Health Inspection Service. Este Departamento tuvo financiamiento por 51,9 millones de dólares, el 8,3% de la asistencia económica.

Tal como se planteó anteriormente, fueron identificados 241 canales, entre fundaciones, instituciones del Gobierno de EE.UU., sector privado y organismos multilaterales, que implementan la asistencia económica de EE.UU.

en los países del ALBA. De este universo, profundizamos en los cinco principales canales:

1. *Pan-American Development Foundation*

Llevó a cabo proyectos por el monto de 48,5 millones de dólares en Bolivia, Cuba y Venezuela. Fue creada en 1962 con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y con el respaldo financiero de la USAID, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Fiduciario de Progreso Social, empresas y donantes privados. Es una institución que busca movilizar al sector privado para ayudar a las personas más vulnerables del hemisferio a través del empleo productivo en microempresas, la capacitación técnica, el desarrollo de la sociedad civil, el emprendimiento nacional y la promoción de la responsabilidad social empresarial. Grandes corporaciones socias: Aqua Splash, BMW, Chevron, Empresas Públicas de Medellín (EPM), Gilead, Greenberg Traurig LLC, Oracle Academy, PepsiCo, Royal Caribbean Group, The Boeing Company, The Coca-Cola Company. Fundaciones socias: American Endowment Foundation, Carnegie Corporation of New York, Fundación Dish, PepsiCo Foundation, Sneed Family Foundation, The Coca-Cola Foundation, The Kislak Family Foundation.

2. *Consortium for Elections and Political Process Strengthening*

Llevó a cabo proyectos por el monto 27,7 millones de dólares en Nicaragua y Venezuela. Se estableció en 1995, opera como un consorcio con International Foundation for Electoral Systems, IRI y NDI. Está financiado por el Global Elections and Political Transitions (GEPT) Program de USAID. “Nos diferenciamos de muchos actores de asistencia para el desarrollo porque mantenemos relaciones a largo plazo con partidos políticos, órganos de gestión electoral, parlamentos, organizaciones de la sociedad civil y activistas por la democracia” (CEPPS, s/f). Opera como un consorcio (bajo una empresa conjunta) para proporcionar a USAID y otros donantes programas de democracia, derechos y gobernanza.

3. *International Republican Institute (IRI)*

Llevó a cabo proyectos por el monto de 26,4 millones de dólares en Cuba, Bolivia, Nicaragua

y Venezuela. Fue fundado en 1983 luego del llamado de Reagan de que “las naciones amantes de la libertad” fomenten la democracia en países que “carecían de cualquier apariencia de desarrollo democrático”. Tiene por objetivo apoyar el desarrollo de alianzas cívicas y empoderar a los actores de la sociedad civil para crear e implementar estrategias a favor de una mayor transparencia del gobierno local.

4. *World Vision*

Llevó a cabo proyectos por el monto de 19,7 millones de dólares en Nicaragua. Es una organización cristiana internacional de asistencia humanitaria y ayuda para el desarrollo fundada en 1950. Dedicada a trabajar con niños, familias y comunidades para superar la pobreza y la injusticia. Los principales socios son: Global Partnership to End Violence, Unión Europea, Joining Forces, Banco Mundial, OMS. Tiene su sede central en Londres y las principales oficinas están ubicadas en Ginebra, Bangkok, Nairobi, Chipre, Los Ángeles, San José de Costa Rica. Tiene más de 30 años de trabajo continuo en Nicaragua, impulsando proyectos de desarrollo sostenible en temas como Protección de la Niñez, Seguridad Alimentaria, Agua y Saneamiento, Educación.

5. *Catholic Relief Services (CRS)*

Llevó a cabo proyectos por el monto de 19 millones de dólares en Nicaragua. Es la agencia oficial internacional humanitaria de la comunidad católica estadounidense, fundada en 1943 por los Obispos Católicos de los Estados Unidos para asistir a los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Es miembro de Caritas Internationalis. Recibe financiamiento de donantes del sector público de EE.UU. como la USAID, Departamento de Agricultura, Centers for Disease Control y de países europeos (United Kingdom’s Department for International Development) y Naciones Unidas, además de diversas corporaciones privadas y donantes individuales. Los programas de ayuda humanitaria de CRS en ALC se centran en satisfacer necesidades críticas e inmediatas a través de ayuda en caso de desastres, servicios de salud y opciones agrícolas viables.

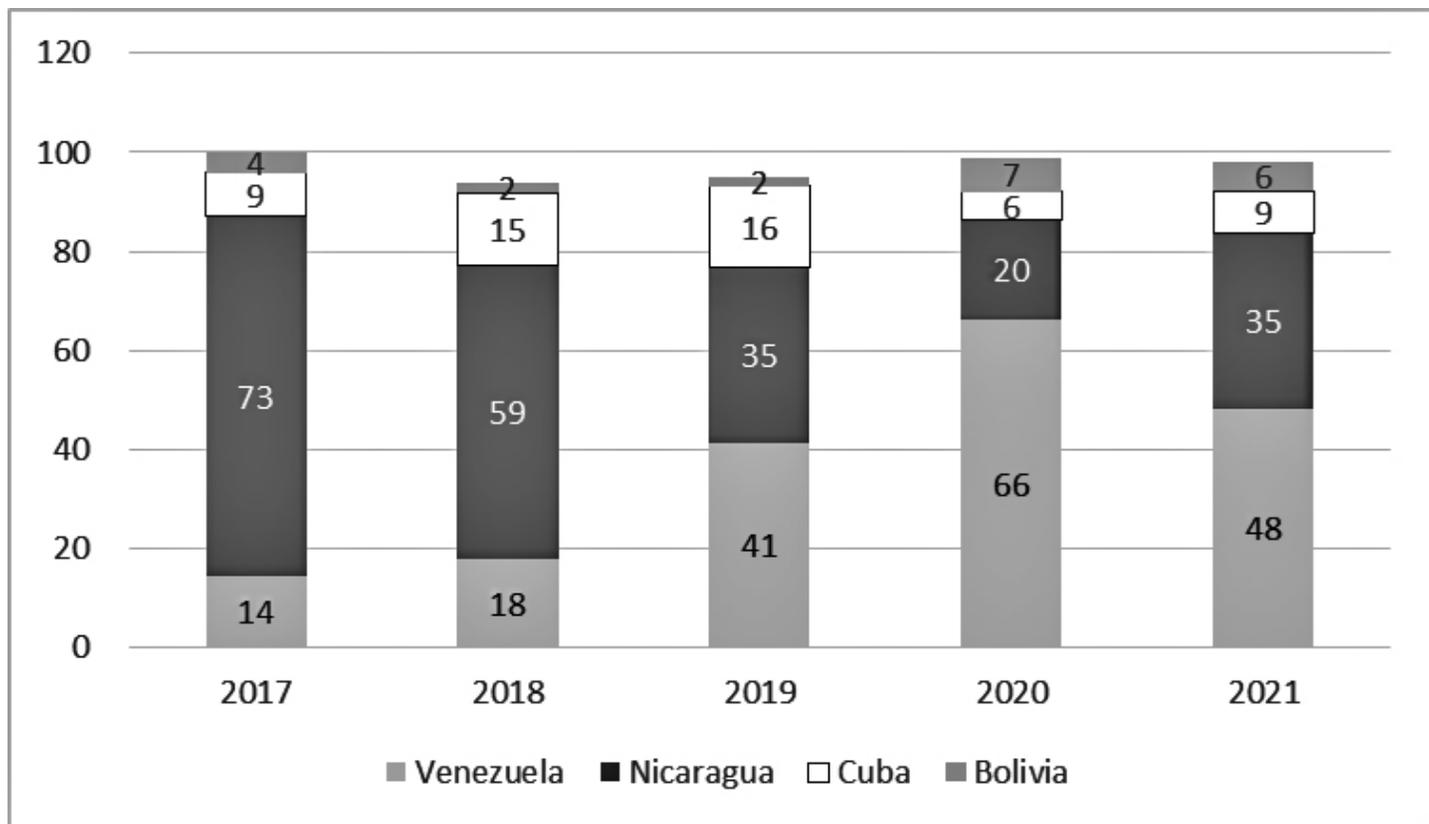
Es importante observar que ninguno de los principales canales es una organización local, sino que son grandes fundaciones/consorcios, en su mayoría con sede en EE.UU. y asociados a empresas transnacionales, lo que da cuenta del negocio por detrás de la “asistencia para el desarrollo”, desde su inicio asociado a la expansión de los mercados. También es importante la relevancia de organizaciones cristianas, como Word Vision y CRS particularmente en Nicaragua.

Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia

Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia, los principales targets de la desestabilización y cambio de régimen, concentran el 98,1% de la asistencia económica del periodo analizado (ver figura 5), donde destacan programas relacionados con fines netamente políticos y electorales.

“La principal agencia que brinda asistencia económica es la USAID. Sus dos subagencias más importantes, el Bureau for Latin America and Caribbean y Bureau for Democracy, Conflict and Humanitarian Assistance representan el 80,2% de la asistencia económica total. En segundo lugar, el Departamento de Estado con 8,3%, siendo la NED su principal subagencia seguida de Population, Refugees, and Migration.”

Figura 5: Principales receptores de la Asistencia económica EE.UU.-ALBA (porcentaje)



Fuente: USAID Explorer (2020) y ForeignAssistance.gov (2021).

Venezuela

La asistencia económica a Venezuela representa el 97,3% del total de la asistencia a este país. El incremento de 2019 a 2020 que se puede visualizar en la figura 5 se explica fundamentalmente por el aumento de 602% del financiamiento de la USAID que comprende casi el total de la asistencia económica.

Son 47 canales los canales de asistencia económica que operan en Venezuela siendo el principal la *Pan-American Development Foundation*, con el financiamiento de 45,3 millones de la USAID a través del Bureau for Global Health y Bureau for Latin America and Caribbean entre 2017 y 2021. Opera dos proyectos, el más importante en términos de recursos es Civil Society Strengthening, Venezuela Participation Project, por el monto de 39,2 millones entre 2017 y 2021, cuyo objetivo planteado oficialmente es “promover la gobernabilidad representativa democrática en Venezuela, proteger el espacio democrático y mejorar la capacidad de los grupos indepen-

dientes de la sociedad civil” (USAID Explorer, 2020). Este proyecto puede considerarse el más abultado a nivel general ALBA en el periodo estudiado. Otro proyecto relevante es Venezuela Human Rights Activity, por el valor de 4,9 millones entre 2017 y 2020, que busca proteger el espacio democrático y mejorar la capacidad de los grupos independientes de la sociedad civil.

En segundo lugar, el Consortium for Elections and Political Process Strengthening que canaliza financiamiento de 24,2 millones de la USAID a través del Bureau for Latin America and Caribbean entre 2019 y 2021 para actividades relacionadas con fortalecimiento de la capacidad Institucional de comunicaciones, apoyo a diversos sectores (“partidos democráticos”, expertos, sector privado, universidades, diáspora) para “mostrar a los venezolanos que existe una alternativa democrática al régimen autoritario de Maduro” (USAID Explorer, 2020), y apoyo a la Asamblea Nacional para desarrollar la capacidad de comunica-

ción y elaboración de políticas de salud, educación, recuperación económica y seguridad ciudadana.

Asimismo, en el contexto de la pandemia, hay que observar que en 2021 Venezuela recibió 702 396 dólares en asistencia por la pandemia del COVID-19 a través del Bureau for Democracy, Conflict and Humanitarian Assistance de la USAID.

Entre 2018-2021 se otorgaron 152,3 millones de dólares para la atención a los refugiados y a la migración venezolana que no se contabiliza dentro del financiamiento a este país. El financiamiento fluyó hacia Argentina, Brasil Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Perú y Uruguay. Además, se otorgó financiamiento a los programas regionales del Caribe, Latinoamérica y el Caribe y Hemisferio Occidental. El 69 % del financiamiento fue para Colombia. Participaron cuatro agencias (Departamento de Estado, USAID; Inter-American Foundation y Departamento del Interior) que financiaron a 37 canales.

Nicaragua

La asistencia económica representa el 98% de la asistencia a Nicaragua. El año con mayor financiamiento fue en 2017, a inicios de la administración Trump (ver figura 5). En Nicaragua operan 129 canales de asistencia económica. El principal canal es Catholic Relief Services con un financiamiento de 19 millones a través de Foreign Agricultural Service del Departamento de Agricultura para el programa *Food for Progress* que prevé la donación de productos agrícolas estadounidenses a países en desarrollo “que se comprometan a introducir o expandir la libre empresa en sus economías agrícolas” (USAID Explorer, 2020).

El segundo canal más importante es *Project Concern International*, que canaliza financiamiento del Departamento de Agricultura y USAID por un monto de 18,9 millones entre 2017 y 2021. Desde el Departamento de Agricultura, implementa el programa McGovern-Dole de donación de productos agrícolas y asistencia financiera y técnica para seguridad alimentaria. Desde la USAID, a través del Bureau for Democracy,

Conflict and Humanitarian Assistance, implementa programas de ayuda alimentaria y “asistencia para refugiados, desplazados internos y otras víctimas de conflictos y desastres” (USAID Explorer, 2020).

En tercer lugar, esta Word Vision que desarrolla actividades con financiamiento del Departamento de Agricultura y USAID por un monto de 5,4 millones entre 2017 y 2021. Desde el Departamento de Agricultura implementa el programa McGovern-Dole. Desde el Bureau for Democracy, Conflict and Humanitarian Assistance implementa asistencia para desastres USAID/OFDA Grant for Central America/Regional y, en 2021, asistencia de respuesta de emergencia a la pandemia del COVID-19.

Cuba

La asistencia económica representa el 99,99% de la asistencia a Cuba. Esta asistencia es constante, sin embargo, tuvo dos caídas en el periodo en 2017 y 2020 (ver figura 5).

En Cuba operan 63 canales de asistencia económica. El canal que concentra mayor financiamiento es el International Republican Institute, que ha implementado actividades por el monto de 4,4 millones de dólares entre 2017 y 2021, financiadas por la NED, del Departamento Estado y por el Bureau for Latin America and Caribbean de la USAID. Las actividades están orientadas a fomentar la participación cívica y fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, libertad de prensa y democracia digital, derechos humanos, asistencia humanitaria (principalmente a “presos políticos” y sus familias).

En segundo lugar, el Grupo de Apoyo de la Democracia, Inc. con 2,3 millones entre 2017 y 2020, a través del Bureau for Latin America and Caribbean de la USAID para actividades de promoción a los derechos humanos y de asistencia humanitaria para “presos políticos y sus familias”. En tercer lugar, Cuban Democratic Directorate con 1,9 millones, a través de la NED para la promoción al acceso a la información “no censurada” y, en particular, programa de radio con “noticias y análisis sobre los acontecimientos que tienen lugar en Cuba, Nicaragua, Venezuela” (USAID Explorer, 2020).

Bolivia

La asistencia económica representa el 99,5% de la asistencia a Bolivia. El pico de 2020 (ver figura 5) se atribuye al peso que adquirió la USAID pues pasó de 6 981 a 20 millones.

En Bolivia operan 65 canales de asistencia económica. El principal financiamiento (5,9 millones entre 2020 y 2021) es para Management Systems International a través del Bureau for Democracy, Conflict and Humanitarian Assistance de la USAID para la implementación de actividades de la Office of Transition Initiatives (OTI). Es importante destacar que el programa en Bolivia es operado desde la OTI de Colombia. En segundo lugar, el United Nations Children's Fund que implementó actividades por el monto de 870 206 a través del Bureau for Global Health de la USAID en 2021. En tercer lugar, el Center for International Private Enterprise que canalizó fondos de la NED entre 2017 y 2019 por el monto total de 729 829 dólares para diversas actividades relacionadas con fomentar el “diálogo democrático inclusivo” y liderado por el sector privado en torno a temas de desarrollo económico, político y social.

En lo que se refiere a asistencia por la pandemia del COVID-19, en 2021 Bolivia recibió 638 151 a través del Bureau for Global Health de USAID canalizada por Prosalud. Destaca, igualmente, que, de todos los países de la Alianza, Bolivia sea el principal receptor de asistencia de la Inter-American Foundation.

Dominica, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, Santa Lucía y Granada

Una característica de la asistencia económica a este grupo de países, que perciben montos menos abultados de financiamiento, es que es su mayoría está destinada a programas de preservación medioambiental, cambio climático y desastres naturales.

En el caso de Dominica la asistencia económica representa el 76% de la asistencia y es operada por 13 canales. Tuvo un incremento considerable en 2018 alcanzando los 5,2 millones de dólares. El principal canal es Samaritan's Purse, que implementó la

asistencia humanitaria a través del Bureau for Democracy, Conflict and Humanitarian Assistance de la USAID, en 2018 y 2019, por el monto de 3,1 millones de dólares. En particular, asistencia para cooperativas pesqueras para reparar y reemplazar la infraestructura dañada por el huracán María de 2017. En segundo lugar, la International Organisation for Migration, que canaliza asistencia humanitaria para prevenir desastres a través del Bureau for Democracy, Conflict and Humanitarian Assistance de la USAID, entre 2019 y 2021 por un monto de 2,9 millones de dólares.

En San Vicente y las Granadinas la asistencia económica representa el 23% del total de la asistencia a este país y es operada por seis canales. El principal financiamiento es canalizado por Sustainable Grenadines a través de la Inter-American Foundation, en 2020 y 2021, por un monto de 389 818 dólares para un programa de restauración en Ashton Lagoon, Union Island orientado a la reducción de los riesgos del cambio climático. La IAF también otorgó financiamiento por 57 723 dólares en 2021, canalizados por North Leeward Rabbit Breeders Cooperative para fortalecer la resiliencia y la mitigación de desastres como parte de la estrategia de respuesta a la pandemia del COVID-19. En 2021 el Bureau for Humanitarian Assistance de la USAID brindó asistencia de respuesta a desastres por la erupción del volcán La Soufrière que ocurrió en abril de 2021.

En San Cristóbal y Nieves la asistencia económica representó el 15% de la asistencia y es operada solamente por dos canales. El más relevante es St. Christopher National Trust con el financiamiento de 71 194 dólares en 2017 a través de Educational and Cultural Affairs del Departamento de Estado para actividades de preservación del patrimonio histórico patrimonial de Spooner's Cotton Ginnery.

La asistencia económica a Antigua y Barbuda representa el 3%, del total y el principal financiamiento es provisto por U.S. Fish and Wildlife Service del Departamento

del Interior en 2020, canalizado por Fauna & Flora International para el Programa de Restauración de Redonda para protección de especies en peligro de extinción.

En el caso de Santa Lucía, la asistencia económica representa el 42% del total y es operada por dos canales, siendo el más relevante Durrell Wildlife Conservation Trust, que canalizó 97 736 de US Fish and Wildlife Service del Departamento del Interior en 2020 para proyecto de conservación de la serpiente de Santa Lucía, considerada la más rara del mundo.

Por último, Granada es el caso en que la asistencia económica representa el menor porcentaje, el 0,2% del total de asistencia de un país de la Alianza. El financiamiento más relevante es una actividad de asistencia técnica realizada por la Federal Trade Commission en 2019.

Asistencia en seguridad y militar

La asistencia en seguridad y militar a los países del ALBA entre 2017 y 2021 fue de 30.5 millones de dólares (ver Tabla 2). En Venezuela y Nicaragua, los principales receptores, destacan los programas de seguridad ciudadana, aparatos judiciales y control de narcóticos vinculados con iniciativas de seguridad como la CBSI y la CARSI, mientras que los países de las Antillas, destacan por el peso de Foreign Military Financing (FMF), uno de los programas de asistencia militar tradicional del gobierno de EE.UU. que proporciona subvenciones y préstamos para la adquisición de artículos y servicios de defensa, implementado por la Defense Security Cooperation Agency, del Departamento de Defensa.

Las principales agencias de este rubro son el Departamento de Defensa, con 66,5%, y la USAID, mientras que las principales subagencias son la Defense Security Cooperation Agency (55,3%), el Bureau for Latin America and Caribbean (31,5%) y la Office of Counter-narcotics (11,1%).

Tabla 2: Asistencia en seguridad y militar EE.UU.-ALBA (2017-2021)

País	USD
Venezuela	9 092 568
Nicaragua	5 669 765
Granada	3 813 506
Dominica	3 522 881
Antigua y Barbuda	3 309 423
San Vicente y las Granadinas	2 878 247
San Cristóbal y Nieves	1 859 976
Bolivia	181 803
Santa Lucía	144 683
Cuba	392
TOTAL MILITAR Y DE SEGURIDAD	30 473 244

Fuente: USAID Explorer (2020) y ForeignAssistance.gov (2021).

Tal como ilustra la figura 6, la asistencia en seguridad y militar se distribuye principalmente en cinco países: Venezuela (29,8%), Nicaragua (18,6%), Granada (12,5%), Dominica (11,6%) y Antigua y Barbuda (10,9%). Asimismo, es relevante destacar que Antigua y Barbuda, Granada, San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas son países donde la asistencia militar es más relevante que la asistencia económica. En el caso de Granada, prácticamente toda (99,8%) la asistencia es de índole estrictamente militar.

Aunque Venezuela sea el principal receptor de la asistencia en seguridad y militar de la Alianza, este rubro representa solo el 2,7% del total de la asistencia a este país, poco más de nueve millones de dólares. En lo que se refiere a la asistencia estrictamente militar, la Defense Security Cooperation Agency del Departamento de Defensa destinó 1,6 millones de dólares para ayuda en casos de desastres en 2019. La Freedom House canaliza el financiamiento de 3,1 millones de dólares de la USAID para el Constitutional Analysis Program, el principal programa de asistencia en seguridad relacionado con aparatos judiciales, llevado a cabo entre 2017 y 2021.

En el caso de Nicaragua, la asistencia en seguridad y militar representa el 2% del total de la asistencia a este país, en el que destaca el peso que tienen los programas militares de contenido antinarcoóticos. La asistencia de la Office of Counternarcotics, concentra el 93,4% de la asistencia provista por el Departamento de Defensa y en 2017 y 2018 fueron destinados 3,1 millones de dólares a través del In-Country Counternarcotics Program under U.S. Southern Command para brindar capacitación y equipo para combatir el tráfico ilícito de drogas y el crimen organizado transnacional.

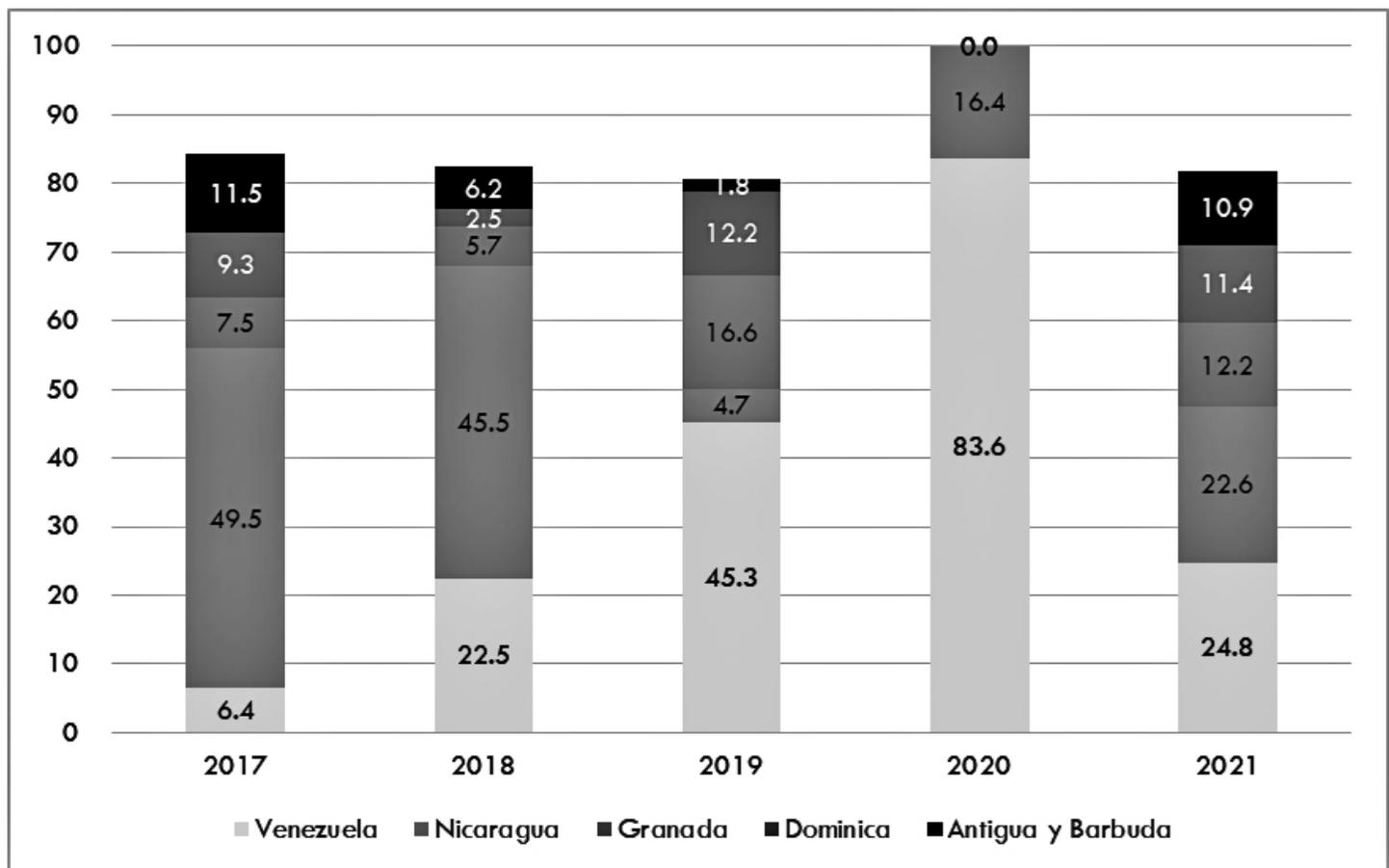
El principal financiamiento de asistencia en seguridad provisto por la USAID a Nicaragua fue canalizado por la Fundación para la Autonomía y el Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua, bajo la Iniciativa de Seguridad Regional de América Central, Fondo de Apoyo Económico (CARSI-ESF) por el monto

de 980,312 dólares entre 2017 y 2019. En segundo lugar, el American Institute for Research con el programa Citizen Security Task Order que realiza actividades en el área de justicia penal y anticorrupción, por un monto de 1,1 millones en 2021.

La asistencia militar representa el 99,8% del total de la asistencia a Granada, el 24% de la asistencia a Dominica y el 97% del total de la asistencia a Antigua y Barbuda. En último país destaca con un pico en 2020 de 1.588% en relación con 2019. En los tres casos el principal programa es FMF.

San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas son los únicos países de la Alianza en que el Departamento de Tesoro ha brindado asistencia técnica para lucha contra el financiamiento del terrorismo y lavado de dinero mientras que Antigua y Barbuda y Santa Lucía son los únicos países que tienen presencia del Homeland Security, con programas

Figura 6: Principales receptores de la Asistencia en seguridad y militar EE.UU.-ALBA (porcentaje)



Fuente: USAID Explorer (2020) y ForeignAssistance.gov (2021).

de capacitación técnica en seguridad de la aviación internacional.

En el caso de Bolivia, la asistencia en seguridad representa solo el 0,5% de la asistencia y se realiza por medio de la implementación de los programas de la Iniciativa Andina e INCLE a través de International Narcotics and Law Enforcement Affairs del Departamento de Estado en 2017 y 2019; mientras que en Cuba el peso de la asistencia en seguridad es solo el 0.01 % y la única actividad registrada fue a través del Departamento de Justicia, con la realización de un curso de la Special Investigation Unit (SIU) de la DEA en 2017.

Reflexiones finales

La investigación permitió establecer una serie completa de datos sobre la asistencia de EE.UU. a los países del ALBA-TCP para el periodo 2017-2021 evidenciando algunas variaciones entre administraciones republicanas y demócratas, debido al rol que suele darle a este tipo de programas en la formulación de la política exterior. Cuando inició la administración Trump se planteó que la región latino-caribeña “no era relevante” para la política exterior estadounidense (Romano y García Fernández 2017; Oppenheimer, 2017; Harris, Gramer y Tamkin, 2017), pero los datos obtenidos contradicen ese planteamiento y el período abordado permite además identificar las continuidades entre el Gobierno Trump y el inicio del Gobierno Biden, así como los cambios más significativos.

Entre el 2017 y el 2021 la asistencia estadounidense hacia los países del ALBA fue de 657,1 millones dólares, de los cuales el 95% corresponde a la asistencia económica y el 5% a la asistencia en seguridad y militar. El aumento de la asistencia a los países de la Alianza durante la administración Trump se dio principalmente en 2020, pasando de 85,6 millones de dólares en 2019 a 221,1 millones en 2020, el equivalente a 158%, que se explica, en buena medida, por el incremento en la asistencia de USAID a Venezuela. Además de Venezuela, los países que experimentaron un incremento de la asistencia fueron Antigua

y Barbuda, Bolivia, Granada, San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas. Es relevante subrayar el caso de Antigua y Barbuda, país que tuvo el principal aumento en asistencia militar entre el 2019 y 2020.

En el primer año de la administración Biden, se percibe un leve descenso en la asistencia a los países del bloque. Sin embargo, hay que considerar que los datos sobre la asistencia militar de 2021 no están disponibles en septiembre de 2022. Esta ausencia, además de generar incertidumbre ilustra la falta de transparencia del gobierno demócrata. Asimismo, destaca que el único país con aumento de la asistencia en el primer año del gobierno de Biden es Nicaragua, con el incremento de 31,2% en la asistencia económica entre 2020 y 2021.

La principal agencia en los países del ALBA es la USAID, que canaliza el 76,9% de la asistencia total. Le siguen el Departamento de Estado y el de Agricultura. El Departamento de Defensa representa solo el 3,1 % de la asistencia total. Sin embargo, considerando únicamente la asistencia en seguridad y militar, este departamento concentró el 66,5%. Las principales Subagencias son el *Bureau for Latin America and Caribbean*, el *Bureau for Democracy, Conflict and Humanitarian Assistance*, ambas dependientes de la USAID y el Foreign Agricultural Service del Departamento de Agricultura, las tres canalizan el 84,4% de la asistencia total. En lo concerniente a la asistencia en seguridad y militar, las principales subagencias fueron la Defense Security Cooperation Agency (55,3%), el Bureau for Latin America and Caribbean (31,5%) y la Office of Counternarcotics (11,1%).

Los resultados de la investigación permiten establecer una división geopolítica en la asistencia estadounidense en el Gran Caribe en función de los intereses de “seguridad nacional” estadounidense. Por un lado, los países de las Antillas menores, como receptores de la asistencia militar tradicional, para asegurar la región. Por otro lado, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia como los principales targets de la política de desestabilización y cambio de régimen, mediante el uso de la asistencia como herramienta de

poder blando.

Los casos de Venezuela y Nicaragua, visibilizan la complementariedad entre la asistencia económica y la asistencia en seguridad, con el peso de programas de seguridad ciudadana, aparatos judiciales y vinculados con iniciativas de seguridad como la CBSI y la CARSI. En el caso de Nicaragua, principal receptor de la asistencia de seguridad y militar de la Alianza, cobra especial importancia la asistencia de la Office of Counternarcotics.

En el ámbito de la asistencia económica, en Venezuela, Cuba y Bolivia los programas y actividades que reciben el financiamiento más abultado están orientados claramente a fines políticos (democracia, transparencia, derechos humanos, procesos electorales, etc.) mientras que en Nicaragua los financiamientos más relevantes son para programas agrícolas y de seguridad alimentaria. Por otro lado, la asistencia económica a Dominica, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, Santa Lucía y Granada, países que reciben menos financiamiento, está principalmente concentrada en programas medioambientales y asistencia humanitaria por desastres naturales.

Para el caso de Venezuela, debería considerarse aun la asistencia a “refugiados venezolanos” en terceros países. Estas cifras no aparecen en las bases de datos como asistencia destinada a Venezuela, pero están claramente orientadas a las estrategias de desestabilización. Entre 2018-2021 se otorgaron 152,3 millones de dólares para atención a refugiados y migración venezolana siendo Colombia el mayor receptor y la USAID la principal agencia implementadora.

El trabajo también pone en evidencia que el modus operandi de la “asistencia” económica y para la seguridad está intrínsecamente articulado a una red institucional que se extiende en el tiempo y en el territorio, garantizando la reproducción de determinadas concepciones y relatos de desarrollo, democracia, organización, seguridad, que trasciende a gobiernos demócratas y republicanos. Se expande con financiamientos más abultados mediante la operación de la USAID (por ejemplo, el financiamiento de 39,2

millones a la Pan American Foundation para el proyecto Society Strengthening, Venezuela Participation Project, el proyecto más abultado a nivel general ALBA), mientras que la NED y la IAF financian instituciones pequeñas a nivel local, abarcando en conjunto un amplio espectro. Esto permite que, incluso en contextos de reducción de presupuesto, las fundaciones y ONG tiendan a permanecer con financiamiento. Este entramado institucional persiste y puede adquirir fuerza o protagonismo en coyunturas de desestabilización, independientemente de la cantidad de dinero recibido, sino por el path dependence, un modo de hacer las cosas que de forma deliberada o no, reniega y desconfía de procesos políticos y gobiernos que postulen la intervención del Estado en la economía para la redistribución de recursos y riqueza.

Notas

1 El ALBA-TCP surge en 2004 en Cuba mediante la suscripción de una declaración conjunta entre Venezuela y Cuba. En 2006 se suma Bolivia, en 2007 Nicaragua, en 2008 Dominica, en 2009 Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas, en 2013 Santa Lucía y en 2014 San Cristóbal y Nieves y Granada. Sus principales ejes son la lucha contra la pobreza y la exclusión; abrir nuevos espacios de diálogo, coordinación y concertación y presentar posiciones comunes ante terceros, se caracteriza por estar en contra de la injerencia y la guerra y aboga por un cambio hacia un sistema Internacional Pluripolar y Multicéntrico; plantea la articulación y fortalecimiento de movimientos sociales para consolidar la integración y por la construcción de una Nueva Arquitectura Económica y Financiera (ALBA-TCP, s/f).

2 USAID Explorer estuvo activa hasta marzo de 2022, momento en que fue sustituida por ForeignAssistance.gov. Ambas bases de datos tienen cifras negativas en agencias y subagencias. Según ForeignAssistance.gov las cifras negativas son una Desobligación (deobligation) definida como “la cancelación o el ajuste a la baja por parte de una agencia de las obligaciones contraídas anteriormente. Los fondos liberados pueden volver a comprometerse dentro del mismo período de tiempo. Los desembolsos negativos aparecen para conciliaciones y correcciones en los sistemas financieros de registro del Gobierno de EE.UU.”. ForeignAssistance.gov, Glossary, <https://foreignassistance.gov/about#tab-glossary>, [consultado el 13 de octubre de 2022]. Por este motivo, los montos negativos fueron desestimados en este trabajo. Para ambas bases de datos se han considerado dólares constantes de 2017. La base de USAID Explorer ya estaba en dólares constantes de 2017, la de ForeignAssistance.gov tiene dólares constantes de 2019, por lo que fueron deflactados a 2017. La base ForeignAssistance.gov fue consultada en septiembre de 2022, no tiene los datos de asistencia militar para el año fiscal 2021 y lo que va de 2022.

Referencias bibliográficas

- ALBA-TCP, (s/f): <https://www.albatcp.org/historia/>
- Appleman Williams, W. (2007): *Empire as a way of life*, New York: IG.
- Ayllón, B. (2007): “La cooperación internacional para el desarrollo: fundamentos y justificaciones en la perspectiva de la teoría de las relaciones internacionales”, *Carta Internacional*, vol. 2, no. 2, pp. 25-40.
- Baran, P. y Sweezy, P. (1974): *El capital monopolista. Ensayo sobre el orden económico y social de los Estados Unidos*, Buenos Aires: Siglo XXI.
- Barnet, R. (1974): *Guerra perpetua. Los hombres y las instituciones detrás de la política exterior estadounidense*, México: FCE.
- CEPPS (s/f): *Our story*, <https://cepps.org/about-us/our-story/>.
- Field, T. (2016): *Minas, balas y gringos. Bolivia y la Alianza para el Progreso en la era de Kennedy*. Bolivia: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, Centro de Investigaciones Sociales.
- ForeignAssistance.gov (2021): www.foreignassistance.gov.
- Harris, B.; Gramer, R. y Tamkin, E. (2017): “The end of Foreign Aid as we know it”, *Foreign Policy*, 24 de abril, <https://foreignpolicy.com/2017/04/24/u-s-agency-for-international-development-foreign-aid-state-department-trump-slash-foreign-funding/>.
- Lajtman, T. (2022): *América Latina y la seguridad estadounidense: geopolítica del imperialismo y su manifestación en Perú y Bolivia, 2000-2019*, Tesis de doctorado, Universidad de Buenos Aires, <http://repositorio.sociales.uba.ar/items/show/2575>.
- Lajtman, T.; García Fernández, A.; (2022): “Dependencia estratégica de Estados Unidos y militarización sobre América Latina (en la era Trump)”, *Revista de Estudios e Pesquisas sobre as Américas*, Vol. 15, No. 2, pp. 62-83, <https://doi.org/10.21057/10.21057/repamv15n2.2021.36677>.
- Mahembe, E. y Odihambo, N. (2017): “On the link between foreign aid and poverty reduction in developing countries”, *Revista Galega de Economía*, vol. 26, no. 2, pp. 113-132.
- Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (2021): “Secretaría Ejecutiva del ALBA-TCP propondrá a Jefes de Estado durante XX Cumbre la creación de observatorio contra la injerencia”, <https://mppre.gob.ve/2021/12/13/secretaria-ejecutiva-alba-tcp-xx-cumbre-creacion-observatorio-injerencia/>.
- Morgenstern, E. y Brown, N. (2022): “Foreign Assistance: An Introduction to U.S. Programs and Policy”, *Congressional Research Service*, 10 de enero, <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R40213>.
- Oppenheimer, A. (2017): “El desdén de Trump por América Latina”, *El nuevo Herald*, 28 de mayo, <https://www.elnuevoherald.com/opinion-es/opin-col-blogs/andres-oppenheimer-es/article152924464.html>.
- Petras, J. y La Porte, R. (1970): “Temas y problemas del desarrollo latinoamericano vistos por funcionarios estadounidenses: la década del setenta”, *Desarrollo Económico*, vol. 10, Buenos Aires, pp. 247-262.
- Romano, S. y García Fernández, A. (2017): “Recortes a la USAID ¿Se retira USAID de América Latina?”, en *CELAG*, 4 de octubre, https://www.celag.org/recortes-la-usaid-se-retira-eeuu-america-latina/#_ftn2.
- Romano, S. (2012): “La asistencia ‘para el desarrollo’ en las relaciones de Estados Unidos y América Latina”, *Análisis Político* no. 76, septiembre-diciembre, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia, pp. 197-218.
- Romano, S. (2013): *¿América para los americanos? Integración regional, dependencia y militarización*, La Habana: Ruth Casa Editorial.
- Romano, S. (2016): “LIFE: geopolítica y guerra psicológica en América Latina”, *Argumentos*, estudios críticos de la sociedad, año 29, no. 80, enero-abril, Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, pp. 155-180.
- Romano, S. (2017): “La asistencia como ‘poder blando’ en la Guerra Fría: Estados Unidos y Guatemala (1954-1963)”, R. García Ferreira y A. Taracena Arriola (comp.) *Guerra Fría y anticomunismo en Centroamérica*, Guatemala: FLACSO.
- Romano, S. (2018): “Redes y neoliberalismo frente a los procesos de cambio en América Latina: el caso de Bolivia”, en Francisco Sierra Caballero, Salvador Leetoy, y Tommaso Garavante (coord.), *Ciudadanía digital y democracia participativa*. Salamanca: Comunicación Social, pp. 173-200.
- Romano, S.; García Fernández, A.; Lajtman, T. y Tirado, A. (2020): “La era Trump y la dependencia de América Latina: una aproximación”, en *CELAG*, <https://www.celag.org/laeratrup/>.
- Tapia Valdés, J. (1980): *El terrorismo de Estado. La doctrina de la seguridad nacional en el Cono Sur*, México: Nueva Imagen.
- USAID Explorer (2020): <https://explorer.usaid.gov>.
- Wills, G. (2010): *Bomb power. The modern presidency and the national security state*. New York: Penguin Books.